

**INFORME DE GIRA DE OBSERVACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
LUEGO DE LAS PROTESTAS CONTRA LA MINERÍA E HIDROELÉCTRICAS
EN LA COMARCA NGÄBE-BUGLÉ
Y EN LAS PROVINCIAS DE CHIRIQUÍ Y VERAGUAS**

PERÍODO DE LA GIRA:

VIERNES 10- LUNES 13 DE FEBRERO DE 2012

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

**DORIS BILL
COORDINADORA NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS DE PANAMÁ
(CONAMUIP)**

**MARIELA ARCE
ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA /
CENTRO DE ESTUDIOS Y ACCIÓN SOCIAL PANAMEÑO (CEASPA)**

**FÉLIX WING Y WASHINGTON LUM
CENTRO DE INCIDENCIA AMBIENTAL (CIAM)**

**DAVID DE LEÓN
COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ**

PANAMÁ, 28 DE FEBRERO DE 2012

INTRODUCCIÓN

Como organizaciones que han realizado una labor a favor de los derechos humanos (DDHH) y atendiendo a las denuncias de violaciones a los DDHH de la población Ngäbe, Buglé y campesina en la Comarca Ngäbe-Buglé y las Provincias de Chiriquí y Veraguas, nos dimos a la tarea de acercarnos en forma inmediata al terreno de los hechos, a fin de comprobar los sucesos dados a conocer por los diversos medios de comunicación.

Este informe busca contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y a la plena vigencia de los DDHH en la sociedad panameña, sin distinción de ningún tipo. Es solo un aporte a los diversos esfuerzos que se están realizando para conocer la verdad de los hechos acaecidos en esta reiterada crisis entre el gobierno y el pueblo Ngäbe, Buglé y campesino.

Demandamos una investigación transparente, y el respeto y protección de las víctimas que han denunciado las violaciones a sus DDHH. Esperamos que sirva como insumo para profundizar la investigación de oficio de las entidades públicas que tienen este mandato constitucional, y que se haga justicia y reparación a las víctimas, y sanción ejemplar a todas las personas que resulten responsables directa e indirectamente.

Para el logro de este trabajo, deseamos reconocer el valioso aporte de las personas y organizaciones solidarias, quienes apoyaron el desarrollo de esta investigación y contribuyeron con la búsqueda de la verdad de los hechos.

Agradecemos también a las personas que nos ayudaron con hospedaje y comida en los distintos lugares a los que acudimos.

Finalmente, agradecemos a las organizaciones de DDHH que decidieron enviar esta Comisión y que brindaron los recursos logísticos y económicos para lograr abarcar los catorce puntos visitados. Todos y todas hemos crecido en humanidad y en el amor a nuestra patria.

I. ANTECEDENTES RECIENTES

La preocupación de los pueblos Ngäbe, Buglé y campesino sobre las contradicciones entre el desarrollo integral de sus comunidades y los impactos de los proyectos mineros en su territorio no es de ahora. Se remonta a la década de 1960. La forma de abordaje de las diferencias con este pueblo por parte de los gobiernos ha suscitado importantes conflictos, como consecuencia de políticas economicistas impulsadas por el Estado. El problema no está circunscrito a un debate sobre minería o hidroeléctricas, sino que tiene que ver con la defensa de la vida de sus comunidades, y de los derechos territoriales y la autonomía cultural y política establecidas en su Carta Orgánica.

En los últimos tres años, este conflicto se ha agravado y ha cobrado cientos de víctimas de la población Ngäbe, Buglé y campesina. No obstante, el gobierno sigue insistiendo en su método y enfoque para abordar los conflictos sociales con este pueblo originario. Describimos muy sucintamente los antecedentes recientes.

- **Comarca Ngäbe-Buglé y provincia de Bocas del Toro (2010)**

En junio de 2010, la aprobación de la Ley 30 de 2010, denominada “Ley 9 en 1” o “Ley Chorizo”, surgió a partir de un anteproyecto de ley que introdujo el Gobierno Nacional que originalmente desarrollaba la aviación comercial, pero que realmente introdujo modificaciones a 6 leyes y 3 códigos. Esta ley realizó modificaciones en diversos temas, tales como: el derecho a huelga, régimen sindical, eliminación del requisito obligatorio de los estudios de impacto ambiental, y procedimiento contra miembros de la Fuerza Pública que cometan delitos con abuso de la fuerza, lo cual degeneró en una serie de enfrentamientos violentos entre la policía y trabajadores de las bananeras, en su mayoría indígenas de los pueblos Ngäbe y Buglé, dejando un saldo de muertos, heridos y detenidos. Debido a ello, el Gobierno Nacional se vio obligado a instalar una mesa de diálogo, que culminó con la subrogación de la Ley 30 de 2010 en todos los temas, excepto el procedimiento contra miembros de la Fuerza Pública que cometan delitos con abuso de la fuerza.

- **Comarca Ngäbe-Buglé y Provincias de Chiriquí y Veraguas (2011)**

El 10 de febrero de 2011, el Proyecto de Ley 277 de 2011 es aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, y 1 día después, sancionado por el Presidente de la República, convirtiéndolo en la Ley 8 de 2011, mediante la cual se reformo el Código de Recursos Minerales, permitiendo, entre otras cosas, la inversión extranjera directa en el sector minero panameño, por parte de empresas propiedad de Estados extranjeros, contrariando así lo dispuesto por el artículo 3 de la Constitución. Esto desencadenó, por segundo año consecutivo, enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacional e indígenas de los pueblos Ngäbe, Buglé y campesino.

- **Comarca Ngäbe-Buglé y Provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro (2012)**

La Comisión Permanente de Comercio y Asuntos Económicos aprueba en Primer Debate el Proyecto de Ley 394, que modifica el Código de Recursos Minerales, incluyendo una modificación al artículo 4 de dicho código, que abriría nuevamente las puertas a la inversión extranjera directa en el sector minero panameño, por parte de empresas propiedad de Estados extranjeros, y desconoce el Acuerdo de San Félix firmado el 27 de febrero de 2011 entre el gobierno y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe, Buglé y Campesino (en adelante la Coordinadora).

II. CONTEXTO GENERAL

A la luz de los hechos documentados en el presente informe, consideramos importante destacar algunos elementos que agudizaron el conflicto del pasado mes de febrero:

- **Riqueza natural versus intereses de grupos económicos**

Para nadie es un secreto la riqueza del territorio de la Comarca Ngäbe-Buglé: bosques, ríos y una rica biodiversidad con los que cuentan los territorios comarcales y de tierras colectivas en las que habitan las poblaciones indígenas. Es observable el interés de

grupos fuera de la comarca por aprovechar toda esta riqueza, no para el desarrollo de su población y del país, sino para beneficiar intereses económicos de grupos particulares e inversionistas trasnacionales.

- **Permanente situación de vulnerabilidad**

Las poblaciones indígenas en Panamá viven en una permanente situación de vulnerabilidad por la pobreza y pobreza extrema en la que viven. La pobreza indígena es calificada de “abismal” por el Banco Mundial y de “masiva” y “profunda” por gobiernos anteriores. Un reflejo de esta situación es la falta de servicios e infraestructura básicos: agua, escuela, centros de salud y carreteras, que traen como consecuencia altos niveles de mortalidad infantil, mortalidad materna, desnutrición, desempleo y violencias múltiples en la comarca.

- **Enfoque cultural que impulsa un discurso de funcionarios públicos que normaliza el racismo, la discriminación y los estereotipos contra las poblaciones indígenas y afrodescendientes**

Si hay un grupo indígena que ha sido históricamente objeto de las peores formas de discriminación económica, social, cultural y racial, es el Ngäbe. Se les endilga ser poco trabajadores, borrachos, no confiables y hasta tener muchos hijos, recibiendo los salarios más bajos entre los trabajadores del campo en el país. Son sujetos de los chistes más denigrantes en algunas poblaciones cercanas a sus hábitat, a pesar de que contribuyen desde la década de 1930 como fuerza de trabajo en la producción agroindustrial de las bananeras, en la recolección del café, la zafra azucarera, la producción de legumbres en las tierras altas, y la limpieza y manejo de potreros de la ganadería en varias provincias. La persistencia de los prejuicios culturales en su contra oculta estos aportes fundamentales a la economía y al desarrollo general del país.

- **Débil institucionalidad y presencia de organismos gubernamentales y de las autoridades tradicionales en la comarca.**

Lo anterior es producto del centralismo y el clientelismo: promesas electorales incumplidas, desinformación, corrupción e impunidad, por parte de pasados y

presentes gobiernos, partidos políticos e incluso organizaciones sociales. Un aspecto importante es la falta de confianza de la población hacia las autoridades gubernamentales por los constantes incumplimientos de acuerdos y planes de desarrollo, entre otros.

- **Manejo de conflictos y enfoque de remilitarización de los organismos de seguridad pública**

Esta situación viene ocurriendo desde la aprobación de los denominados Decretos Leyes de Seguridad (Decretos Leyes 7 y 8 de 2008), durante la administración del Presidente Martín Torrijos, sin que la Asamblea Nacional haya ejercido su potestad constitucional de controlar los actos del Ejecutivo, puesto que aún no ha dictado las Leyes que deberían reemplazar los referidos Decretos Leyes. A pesar que nuestro país supuestamente no tiene ejército, pues el mismo fue abolido con la reforma constitucional de 1994, en los desfiles patrios se hace evidente cómo año tras año tanto el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) como el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) han venido siendo dotados de equipos y elementos de guerra, bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico. Es pertinente resaltar que uno de los mencionados Decretos Leyes derogó el Decreto Ejecutivo 168 de 1992, que regulaba el uso de la fuerza policial desde la administración del Presidente Guillermo Endara, el cual incluía no solo el procedimiento adecuado para usarla, sino también la prohibición del uso de municiones con perdigones, entre otras medidas tendientes a prevenir la repetición de los abusos que se produjeron especialmente durante la fase final de la dictadura militar (1987-1989).

III. CONTEXTO GEOGRÁFICO, CULTURAL Y ORGANIZATIVO DE LOS PUEBLOS NGÄBE Y BUGLÉ

La comarca se distingue por su alta dispersión geográfica (17 habitantes por Km²), población itinerante, y organización compleja y diversa. A inicio de la década de 1960, líderes Ngäbe y Buglé adoptaron la iniciativa de organizar al pueblo en Congresos. Luego de muchas luchas, en marzo de 1997 se crea, mediante la Ley 10, la Comarca

Ngäbe-Buglé. Esta ley reconoce las autoridades o instituciones étnico-culturales, y la existencia del Congreso General, y los Congresos Regionales y Locales. Las Autoridades Tradicionales son el Congreso General, como máximo organismo de expresión y decisión étnica y cultural, representado por el Cacique General, que es la máxima autoridad. Igualmente, existen los Congresos Regionales; a nivel distrital, el Congreso Local; y a nivel comunitario existe la figura del Jefe Inmediato.

La comarca cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 6,968 Km², la cual representa un 8.8% de la superficie del país, segregando su territorio a las Provincias de Bocas de Toro (4,113.8 Km²), Chiriquí (1,982.0 Km²) y Veraguas (577.5 Km²). Está formada por 7 distritos: Besikó, Mironó, Müna, Nole Duima, Ñurum, Kankintú y Kusapín, los cuales están divididos en 58 corregimientos y 1,678 lugares poblados. La capital de la comarca es Llano Tugrí.

Los Ngäbe y los Buglé viven en una zona con una inmensa variedad de sitios naturales y de una gran belleza. Son áreas con potencial ecoturístico, donde se puede observar y admirar las costumbres y cultura de sus habitantes. En la visión indígena tradicional, el trabajo grupal o comunitario no es para la acumulación y el lucro, sino para el consumo y distribución, siendo fundamental la reciprocidad entre los vecinos y las comunidades, ya que se supone que cada familia está haciendo lo mismo y todos están funcionando como un sistema global. Estos pueblos indígenas han preservado y mantenido sus creencias, modo de vida y sus prácticas tradicionales de comunicación.

Los pueblos Ngäbe y Buglé han tenido y tienen formas tradicionales de organización y control social que se adaptan y transforman de acuerdo a las necesidades del grupo. En ellos, el patrón de asentamiento se basa en la familia extensa. Esta institución es la base primaria de su organización.

Las luchas de las mujeres en la comarca ponen en evidencia la injusticia a la que continuamente son sometidas, por cuestiones de género e identidad como pueblos.

Esta realidad ha llevado a elevar la organización y participación de las mujeres en los distintos niveles políticos, económicos, sociales y culturales en este siglo XXI.

IV. METODOLOGÍA APLICADA

La metodología utilizada es fundamentalmente cualitativa, dadas las características de los sucesos y del contexto. Fue así como se modificó el enfoque inicial, que consistía en recoger una muestra cuantitativa de los participantes en los hechos. En su lugar, se procedió a recabar los testimonios de personas afectadas. Para ello, se utilizó parcialmente un instrumento (ficha de entrevista general), que se tuvo que adecuar a las realidades. Se llenaron 58 fichas de entrevista y se hicieron 6 grabaciones de audio y 8 de video, que recogen una muestra representativa de los diversos tipos de presuntas violaciones a los DDHH (15 tipos identificados. Ver detalle más adelante.)

Debemos señalar que las vigiliat pacíficas en la Carretera Panamericana fueron organizadas; pero luego de la represión por los estamentos de seguridad, se fueron incorporando olas de personas que fueron bajando rápidamente de las comunidades aledañas. De ahí que, al día de hoy, no se tenga claridad sobre la cantidad de personas que estuvieron finalmente involucradas en los hechos.

V. ACTORES ENTREVISTADOS

DIRECTOS:

1) Presuntas víctimas de violaciones de DDHH. Información de primera fuente y de alta calidad: testimonios, datos personales, narración detallada y muestra física en sus cuerpos. Se intentó identificar especialmente a las víctimas mujeres y menores de edad, por tratarse de grupos aún más vulnerables.

De todas las presuntas víctimas entrevistadas, 25 alegaron haber sido privadas de libertad, golpeadas, heridas, afectadas en los ojos y maltratadas, psicológica, verbal y físicamente.

2) Sacerdotes católicos de Tolé, San Félix, Remedios y San Lorenzo, cuyas parroquias abarcan la Comarca Ngäbe-Buglé.

3) Organizaciones de la sociedad civil de la Provincia de Chiriquí: Colegio Provincial de Abogados de Chiriquí; ambientalistas de Volcán y Boquete, y periodistas de David y Boquete.

4) Pobladores latinos (no indígenas) de Tolé, San Félix, Volcán y Boquete, Provincia de Chiriquí.

5) Institucionales: Servicio de Urgencias Médicas (SUME) 911 de Tolé, Puesto de Policía de Tolé (no dieron información pero sí tomaron nuestros datos personales), y Alcaldía de Tolé (el Alcalde no estaba).

INDIRECTOS:

Parientes, vecinos y acompañantes que fueron testigos de los hechos.

VI. COORDINACIÓN CON OTROS ESFUERZOS DE DDHH

Dadas las circunstancias en que se organizó esta gira, solo se pudo contactar en campo a las siguientes entidades:

- Defensoría del Pueblo: Encuentro en campo en Alto Caballero, comunicación telefónica con responsable en David para entrevista y articulación de esfuerzos. Nos dieron por respuesta que se dirigiera la solicitud a Relaciones Públicas de la oficina central de la Defensoría del Pueblo en Ciudad de Panamá.
- Asociación de Educadores Veragüenses (AEVe): Se acordaron reuniones en sus oficinas el viernes 10 y el lunes 13 de febrero, pero no lograron concretarse. Se conoce que también hicieron un esfuerzo de investigación y sistematización de informaciones.
- Acción Cultural Ngöbe (ACUN): Breve contacto con este esfuerzo que se está tratando de articular en la zona.

VII. TIPOS DE PRUEBAS RECABADAS

Fichas de entrevista general, relatos testimoniales, fotos, audio, video y copias de documentos.

VIII. RUTA DE LA INVESTIGACIÓN

Catorce (14) lugares visitados: Santiago, Ojo de Agua y Viguí (Veraguas); Tolé, San Félix, Horconcitos, Las Lomas, Volcán, Cerro Punta, Boquete y David (Chiriquí); y Alto Caballero, Chichica y Cerro Coco (Comarca Ngäbe-Buglé).

IX. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS EVENTOS

Hemos identificado los siguientes momentos sobresalientes:

- Vigilia de ciudadanos y autoridades de los pueblos Ngäbe, Buglé y campesino, solicitando el diálogo con las autoridades nacionales para el cumplimiento de acuerdos pactados en el 2011;
- En ausencia del diálogo, manifestación y cierre de vías por parte de los pueblos Ngäbe, Buglé y campesino;
- Represión, privación de libertades individuales y colectivas y reapertura de vías por parte del Estado;
- Reacción de defensa y preservación de la integridad física de los manifestantes y de sus familiares, quienes les estaban esperando en otros puntos del entorno;
- Mediación de la Iglesia Católica para establecer diálogo y negociación entre el Estado y representantes de los pueblos Ngäbe, Buglé y campesino.

(Ver en anexo: “Ciclo de la Violencia y abordaje institucional del gobierno de los conflictos sociales con los pueblos Ngäbe y Buglé desde el 2010 hasta el presente”)

X. CRONOLOGÍA DE LOS EVENTOS

Esta cronología se nutre de la información vertida por los diferentes medios de comunicación social y sus respectivos corresponsales que cubrieron los hechos en la zona, así como de los diversos testimonios de las y los actores entrevistados.

Domingo 27/2/2011:

-Luego de cerrar por varios días la Carretera Interamericana, pidiendo la derogación de la Ley 8 de 2011, que reformó por primera vez el Código de Recursos Minerales, la Coordinadora, por una parte, y el Gobierno Nacional, por la otra, acceden a negociar bajo la mediación de la Iglesia Católica. Al término de las negociaciones, se firma el Acuerdo de San Félix, que incluyó los siguientes puntos:

"1. Aceptar la instalación urgente de la comisión integrada por la representación del Gobierno Nacional y la coordinadora,

2. Crear una ley que prohíba explícitamente la exploración, explotación de la minería en la Comarca y la protección de los recursos hídricos y ambientales de la comarca Ngäbe Bugle y Campesino.

3. El proceso de diálogo se iniciará el 1 de marzo de 2011, en San Félix en tono a la Ley 8.

4. La liberación de todos los detenidos, la no represalia y persecución a los dirigentes, miembros de la Coordinadora, el apoyo de parte del Gobierno Nacional a la familia del señor Abraham Montezuma por accidente vehicular ocurrido el día 26 de febrero de 2011 y otras víctimas producto de la manifestación.

5. La participación de la Iglesia Católica como mediador y garante en el proceso de diálogo que se instale.

6. El proceso de repliegue de los manifestantes y la apertura de la vía Panamericana."

Martes 19/7/2011:

-En cumplimiento de los Acuerdos de San Félix, los Diputados Jorge Alberto Rosas (oposición) y Francisco Javier Brea (oficialista), presentan el Anteproyecto de Ley 8

(hoy Proyecto de Ley 415), como resultado de las negociaciones posteriores a la derogación de la Ley 8 de 2011, que reformó el Código de Recursos Minerales, llevada a cabo durante los meses anteriores por la Comisión Ad-Hoc nombrada por la Coordinadora y la Asamblea Nacional.

Miércoles 5/10/2011:

-El Diputado Raúl Hernández, Presidente de la Comisión Permanente de Comercio y Asuntos Económicos, presenta el Anteproyecto de Ley 95 (hoy Proyecto de Ley 394), que reforma nuevamente el Código de Recursos Minerales, y a cuya discusión se le da prioridad por encima del Anteproyecto de Ley 8 (hoy Proyecto de Ley 415).

Miércoles 19/10/2011:

-La Comisión Permanente de Comercio y Asuntos Económicos aprueba en Primer Debate el Proyecto de Ley 394, incluyendo una modificación al artículo 4 de dicho código, que abriría nuevamente las puertas a la inversión extranjera directa en el sector minero panameño, por parte de empresas propiedad de Estados extranjeros, contrariando así lo dispuesto por el artículo 3 de la Constitución.

Miércoles 25/1/2012:

-La Comisión Permanente de Comercio y Asuntos Económicos aprueba en Primer Debate el Proyecto de Ley 415, pero excluye el artículo 5 del mismo, a pesar que el mismo también había sido consensuado por la Comisión Ad-Hoc nombrada por la Coordinadora y la Asamblea Nacional. El texto no incluido decía así:

"Artículo 5. Se cancelan todas las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras, para la exploración y explotación de los recursos minerales y para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la Comarca Ngäbe Buglé, áreas anexas, territorios y comunidades Ngäbe Buglé fuera de la Comarca y se suspenden de inmediato todos los trabajos que estén llevando a cabo dichas empresas."

Martes 31/1/2012:

-La Cacique General y la Coordinadora movilizan masivamente a los pueblos Ngäbe, Buglé y campesino, los cuales cierran la Carretera Interamericana en varios puntos desde Viguí, Provincia de Veraguas, y Horconcitos, Provincia de Chiriquí, donde se encuentran los accesos a la Comarca Ngäbe-Buglé. Los indígenas bajan desde las montañas por oleadas. Al principio fueron cientos, pero con el pasar de los días se convierten en miles, en una repetición del cierre ocurrido en febrero de 2011.

Jueves 2/2/2012:

-A las 10:15 p.m., ocurre el primer enfrentamiento en Tolé. Un grupo de manifestantes fue agredido por miembros de la Fuerza Pública en la Carretera Interamericana. Hubo varios heridos por golpes propinados con varas policiales y disparos de perdigones.

Viernes 3/2/2012:

-La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ordena a las compañías prestadoras del servicio de telefonía móvil suspender totalmente dicho servicio entre Viguí y Horconcitos, sin que el Consejo de Gabinete declarara previamente el estado de urgencia en el área. Esto obstaculizó la cobertura periodística por banda ancha de los hechos subsiguientes, así como la coordinación entre los dirigentes de los pueblos Ngäbe, Buglé y campesino, toda vez que la red de telefonía fija es prácticamente inexistente en la Comarca Ngäbe-Buglé. (Ver noticias publicadas por los medios de comunicación social durante la fecha en mención)

Sábado 4/2/2012:

-En horas de la mañana, un grupo de manifestantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) fue arrestado luego de cerrar una calle en la Ciudad de Panamá, en solidaridad con la protesta.

-El gobierno acuerda negociar con la Cacique General y la Coordinadora en San Lorenzo, Provincia de Chiriquí. Sin embargo, la dirigencia y el Obispo Católico de la Diócesis de David esperaron por casi 5 horas hasta que se les comunicó que el propio

Presidente Martinelli había cancelado la negociación. En la Ciudad de Panamá, organizaciones de la sociedad civil comienzan a circular una petición en línea, haciendo llamados de último minuto, en anticipación a la represión policial.

-Entretanto, grandes contingentes (400-600 unidades) de policías antimotines, incluyendo presumiblemente a miembros del SENAFRONT, movilizados desde la Ciudad de Panamá, se concentran cerca del límite interprovincial entre Chiriquí y Veraguas, en preparación para el despeje de la Carretera Interamericana por la fuerza.

Domingo 5/2/2012:

-Luego de 5 días de cierre total, policías antimotines, incluyendo presumiblemente a miembros del SENAFRONT, comienzan a hacer uso de la fuerza contra miles de hombres, mujeres, adolescentes y niños Ngäbe, Buglé y campesinos a lo largo de la Carretera Interamericana. Se reportan 2 muertos, uno de ellos un menor con discapacidad. También se reportan numerosos heridos y detenidos de todas las edades, incluyendo mujeres embarazadas. (Ver noticias de la fecha)

Los manifestantes Ngäbe, Buglé y campesinos señalan haber sido perseguidos a campo abierto, recibido disparos desde helicópteros, detenidos en residencias mediante allanamientos efectuados sin autorización judicial, o en hospitales luego de recibir atención de primeros auxilios o sin recibirla. Incluso hay reportes de pasajeros del transporte público y otras personas que no tenían nada que ver con la manifestación, pero que fueron detenidas solo por el hecho de ser Ngäbe o Buglé. Los manifestantes señalan haber recibido disparos de bombas de gas lacrimógeno de varios tipos a corta distancia y en forma indiscriminada, incluso en áreas residenciales, cerca de hospitales y dentro de recintos cerrados.

En el curso de los enfrentamientos, es destruido el Puesto de Policía de San Félix.

-Al conocerse la noticia, miembros de los pueblos indígenas Ngäbe y Buglé cierran la Carretera Volcán-Caizán y son reprimidos por la Policía Nacional. En el curso de los

enfrentamientos, son destruidas las instalaciones del Puesto de Policía, la Junta Comunal y la Infoplaza de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) de Volcán.

-Cientos de ciudadanos indígenas y ambientalistas empiezan a marchar cada tarde pacíficamente en Boquete, Chiriquí.

-Pese a ser domingo, se celebran marchas y vigilias solidarias en David, Santiago, Colón y Panamá.

Lunes y martes 6-7/2/2012:

-Muchos detenidos Ngäbe, Buglé y campesinos señalan haber sido mantenidos en buses del Ministerio de Educación (MEDUCA) o la Policía Nacional, en algunos casos por más de 24 horas, sin que se les proporcionara agua o alimento y sin que pudieran hacer uso de un baño. Durante este período, muchos de ellos señalan haber sido objeto de todo tipo de abusos físicos y psicológicos, incluyendo abusos sexuales, especialmente algunas mujeres, entre ellas una presunta menor de edad. En David, la Defensora del Pueblo fue maltratada física y verbalmente por agentes y oficiales policiales cuando les pidió desatar a mujeres y niños detenidos.

La Policía Nacional mantuvo incomunicados a los detenidos tanto en Chiriquí como en Veraguas. Al principio, se negó incluso la asistencia de abogados defensores, pero luego se permitió la presencia de los mismos en las diligencias de declaración indagatoria. Para entonces, los detenidos ya se encontraban a órdenes del Ministerio Público. Hubo rumores no confirmados de que a los detenidos se les transferiría al Centro Penitenciario La Joyita en la Ciudad de Panamá.

-Entretanto, continúan los cierres parciales de la Carretera Interamericana entre Viguí y Horconcitos.

-Ciudadanos indígenas cierran la Carretera Chiriquí-Bocas del Toro, como muestra de solidaridad. Sin embargo, no se producen enfrentamientos en dicha área.

-Miembros de la AEVe se manifiestan en Santiago y son reprimidos por la Policía Nacional. Algunos son heridos por golpes y perdigones y/o detenidos.

-Se producen nuevos cierres y manifestaciones en Cerro Punta, David, Coclesito, La Chorrera, Panamá y Colón, a cargo de asociaciones ciudadanas.

Miércoles 8/2/2012:

-La Cacique General y la Coordinadora, por una parte, y el Gobierno Nacional, por la otra, acceden a negociar bajo la mediación de la Iglesia Católica. Al término de las negociaciones, se firma el Acuerdo de San Lorenzo I, que incluye los siguientes puntos:

"Primero: Ordenar la liberación inmediata de todos los detenidos Ngäbes y de los detenidos de diferentes grupos solidarios en los diferentes puntos del país sin formulación de cargos y que sean devueltos a sus respectivos puntos de base.

Segundo: La atención urgente de los afectados e indemnización permanente a los familiares de Jerónimo Rodríguez Tugrí y otros fallecidos. El cese de la represión y la no persecución a los manifestantes, miembros de la coordinadora, cacique general, regionales, locales y miembros solidarios participantes en esta lucha. La garantía de seguridad para la dirigencia y que se ordene el retiro de todos los expedientes que adelanta el Ministerio Público, relativos al tema en cuestión y que se decrete el sobreseimiento definitivo.

Tercero: Restablecer el sistema de comunicación de telefonía móvil.

Cuarto: El retiro inmediato de unidades antidisturbios en el área de conflicto y el cese de sobrevuelos de helicópteros de reconocimiento aéreo.

Quinto: Mantenemos como mediador y garante del proceso de diálogo a la iglesia católica, y participarán como observadores del mismo la iglesia evangélica de Panamá, la relatora de la ONU de Panamá, y el rector de la Universidad de Panamá.

Sexto: El diálogo se realizará con la participación de la Cacique General de la Comarca con su equipo técnico de trabajo y los miembros de la Coordinadora por la defensa de los Derechos Naturales de los pueblo Ngäbe Buglé y Campesino, con su equipo de trabajo.

Séptimo: Solicitar al Presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos y demás miembros reconsiderar en primer debate el Proyecto de Ley 415 para la incorporación y discusión del artículo 5 del anteproyecto y se declare su tratamiento con urgencia notoria a partir del 8 de febrero de 2012.

Octavo: Solicitar a los organismos de derechos humanos una exhaustiva investigación de los hechos ocurridos a los heridos, detenidos y muertos durante las manifestaciones.

Noveno: Que ambas partes se comprometen a la debida divulgación y explicación del acuerdo ante la faz del pueblo panameño y medios de comunicación.

Décimo: Una vez firmado este acuerdo nos comprometemos a retirar a nuestros compañeros vinculados a nuestro movimiento de los diferentes puntos de base. Se designa a una comisión de médicos indígenas para dar seguimiento a nuestros heridos y afectados que se encuentran en diferentes hospitales del país."

XI. RUTA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD SEÑALADA POR LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS

Dependiendo de la distancia del centro de operaciones de la "guardia", los "agarraban" y los "metían" en carros patrullas, o los "metían" hacinados en buses de la Policía Nacional o del MEDUCA. Si estaban cerca de los centros de operaciones, los llevaban

directamente a ellos, y podían esperar hasta 24 horas en el lugar. Luego los trasladaban a Las Lajas para transportarlos en helicóptero a David. Los privados de libertad de otros sitios, como Tolé y Horconcitos, eran llevados a San Félix, donde podían esperar más de 24 horas y luego eran transportados a Las Lajas.

Las denuncias señalan que los vejámenes más graves se dieron durante el tiempo en que estuvieron privados de libertad en manos de la “guardia”. Al llegar a David, eran repartidos en por lo menos cuatro centros de detención: Parque Recreativo Van Kleef, en David; el Centro de Femenino de Rehabilitación de Los Algarrobos, distrito de Dolega; la Cárcel de David; y el Centro de Menores Aurelio Granados. No se tiene certeza del tiempo que estuvieron mezclados mujeres y hombres, y adultos con menores, antes de repartirlos en lugares específicos. A la fecha no hay certeza si estuvieron en otros lugares como las instalaciones de la Gobernación de Chiriquí.

XII. DERECHOS Y GARANTÍAS PRESUNTAMENTE VULNERADOS (SIN ORDEN DE IMPORTANCIA)

De acuerdo a las informaciones recabadas se identifican los siguientes derechos y garantías presuntamente vulneradas:

1. SUSPENSIÓN DE LAS GARANTÍAS (arts. 55 de la Constitución y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)).

-Suspensión de garantías, presuntamente sin previa declaratoria del estado de urgencia.

Testimonio

“Arrojaban bengalas por la noche y llegaban en helicópteros y aviones sobrevolando a baja altura de día y de noche, era como una guerra. Los heridos eran detenidos al ser dados de alta.” (Ciudadano de Horconcitos)

2. LIBERTAD DE EXPRESIÓN (arts. 37 de la Constitución y 13 de la CADH y Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión)

-Suspensión total del servicio de telefonía móvil, lo cual impidió las comunicaciones de los pueblos Ngäbe, Buglé y campesino, entre sí y con el exterior, además de dificultar la cobertura periodística, los cuales son hechos públicos y notorios. (Fecha: desde el viernes 3 de febrero hasta el martes 7 de febrero. Ver noticias alusivas.)

Testimonio

“Se hizo un uso excesivo del poder, se cancelaron las comunicaciones, se aisló la zona, para solo el gobierno decir su versión de los hechos, para dejar a los indígenas sin voz y aterrorizarlos, esperando que ellos se echaran a correr.”
(Ciudadano de San Félix)

3. INVOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS (arts. 37 de la Constitución y 13.3 de la CADH) dentro del derecho de libertad de expresión.

-Suspensión total del servicio de telefonía móvil, lo cual impidió las comunicaciones de los pueblos Ngäbe, Buglé y campesino, entre sí y con el exterior, además de dificultar la cobertura periodística, los cuales son hechos públicos y notorios. (Fecha: desde el viernes 3 de febrero hasta el martes 7 de febrero. Ver noticias alusivas.)

-Intercepción de llamadas telefónicas, presuntamente sin autorización judicial, lo cual es un hecho público y notorio. (Ver declaración del Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Diputado Marcos González, a los medios de comunicación)

Testimonio

“Estuvieron dos unidades policiales subidas en la torre de comunicaciones, y debajo de ellos una patrulla con policías de forma permanente. No se podían hacer llamadas internacionales y las nacionales solo se recibieron en teléfonos fijos, pues los celulares no servían.” (Ciudadano de Tolé)

4. VIDA (arts. 17 y 30 de la Constitución, 4 de la CADH y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Protocolo a la CADH sobre Derechos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, y Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas)

-Pérdida de las vidas de los jóvenes Jerónimo Rodríguez Tugrú y Mauricio Méndez, presuntamente ocasionadas por miembros de la Fuerza Pública.

-En el momento de la gira, al equipo de investigación se le informó de la existencia de presuntas personas desaparecidas, pero a la fecha de redactar el presente informe, no fue posible confirmar dicha información.

Testimonios

“Vi a la policía sacar su arma y hacer disparos. Uno de ellos me apuntó pero bajó el arma cuando le dije que disparara, que qué importaba una vida más. Entonces sacó una escopeta y disparó una bala de goma en mi pierna izquierda. Estuve por dos días sin atención médica. Cuando los familiares iban a preguntar por ellos, los detenían también. Esto sucedió en la cárcel y en el Hospital Regional de David.” (Ciudadano de Juay)

“Nos disparaban desde los helicópteros. Tiraban perdigones, balas y bombas. Los de SENAFRONT nos perseguían en la noche.

Teníamos dos barriles de agua y comida en un potrero y la Policía tiró una cosa en el agua.” (Ciudadano de Tolé)

5. INTEGRIDAD PERSONAL (arts. 17 de la Constitución, 5 de la CADH, 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes)

-Uso excesivo de la fuerza, caracterizado por la abundante e indiscriminada utilización de perdigones, bombas lacrimógenas y hasta armas letales, mediante disparos a corta distancia de los manifestantes y desde helicópteros, según los relatos testimoniales recabados por esta Comisión. (Ver noticias de la fecha)

-Presuntas torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, tales como manos atadas a la espalda y con zunchos plásticos excesivamente apretados, privación de agua y alimento, negación del uso del baño, privación del sueño y hacinamiento, entre otras condiciones de detención, todo ello según los relatos testimoniales recabados por esta Comisión.

-Lesiones físicas presuntamente derivadas del uso excesivo de la fuerza, las cuales constan en los exámenes médico-legales que reposan en el expediente penal abierto de oficio por el Ministerio Público, y muchas de las cuales aún requieren de atención médica y seguimiento permanente.

-Lesiones psíquicas presuntamente derivadas del uso excesivo de la fuerza y las condiciones inhumanas de detención, muchas de las cuales aún requerirían de atención urgente, según los relatos testimoniales recabados por esta Comisión.

Testimonios

“El domingo 5 de febrero a partir de las siete de la mañana se realizaron enfrentamientos entre las unidades anti disturbios y los manifestantes, en la calle frente al Centro Misionero Jesús Obrero, la gente corrió a refugiarse en el Centro Misional y las unidades anti disturbios dispararon gases lacrimógenos sobre nuestro Centro Misional, yo solicité a los que disparaban que este era la Iglesia Católica y que no dispararan a los manifestantes, también les decía a los manifestantes que no tiraran piedras desde el Centro Misional pero las unidades antidisturbios me dijeron que yo huyera del lugar y siguieron disparando. Algunas personas gritaban heridos y yo salí a la calle en busca de dichos heridos y en una casa vecina encontré a un joven herido, inmediatamente di orden al conductor de nuestro carro para trasladarlo al Centro de Salud; mientras atendíamos al herido, las personas en el lugar me mostraron unos casquillos que habían en el suelo y otros que tenían en las manos, yo recogí 5 de ellos, tres dicen FEDERAN ESPECIAL 38 y dos tienen una inscripción que dice 9 milímetros, los guardé como evidencia y trasladamos al herido al Centro de Salud.” (Extracto de la declaración jurada del R.P. Carlos Antonio De La Cruz Murillo, Párroco de

Tolé, ante el personero Lic. Erick Y Bonilla de Tolé, el lunes 6 de febrero a las 2.00p.m.)

“Tiraron a quemarropa con calibre 38. Fui seguridad por 12 años y conozco de armas y municiones. Nos disparaban como a 5 o 6 metros de distancia, a un muchacho de Cerro Sombrero le dispararon en la rodilla, iba a refugiarse en una casa, no llevaba nada en sus manos, solo iba huyendo.” (Ciudadano de Tolé)

6. INTEGRIDAD SEXUAL DE LA MUJER (arts. 17 de la Constitución, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer)

-Presuntos abusos y malos tratos en atención a la condición de mujer, denunciados a través de los medios de comunicación social e Internet.

-Presuntos actos de violencia sexual con abuso de poder, denunciados a través de los medios de comunicación social e Internet.

Testimonios

“A mi esposa la detuvieron allá abajo, y hasta el día de hoy no tengo el valor para hablar con ella sobre lo que le pasó en la cárcel”. (Ciudadano de Nedrini)

“A mi hija de 17 años la agarraron los policías junto con su cuñada en las Matas de San Félix el domingo como a las 8 de la mañana. Ella me dijo lo siguiente:

‘Me agarraron por el pelo y me tiraron al piso, me tiraron gas en los ojos, mientras me daban golpes en todo el cuerpo y me decían que no gritara. Me arrastraron hasta el carro de la policía y me amarraron los brazos hacia atrás, así estuve muchas horas. Los policías me decían que todos iban a ser maridos míos, discutieron largo rato para ver quién era el que me iba a violar, hasta que uno dijo que solo él iba a hacerlo. En el bus se pusieron en rueda y el violador se tapó la cara para que no se la pudiera ver, empezó a forcejear conmigo, hasta que me pusieron un arma en el pecho y me amenazaron de que me iban a matar si no

dejaba de gritar y no lo dejaba violarme. Me desnudaron delante del grupo y mientras me violaba los otros también se reían, me tocaban y decían cosas vulgares. Otro también quería pero el que estaba violándome no lo dejó. Me escondieron mi ropa y me dieron un pantalón chiquito sin camisa, así estuve mucho tiempo. Cuando íbamos llegando al cuartel de David me devolvieron mi ropa. Me hicieron firmar un papel pero no sé qué decía.'

Durante dos días no supe nada de mi hija, no sabía donde la había llevado, hasta que supe donde tenían a los menores. Cuando por fin llegó libre se desmayó. Hoy siempre llora y no puede dormir, no quiere regresar al colegio, tiene miedo de los guardias pues saben quién es y dónde vive". (Madre de la menor presuntamente violada, entrevistada en San Félix)

7. LIBERTAD PERSONAL (arts. 21 de la Constitución, 7 de la CADH y 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)

- Detenciones por más de 24 horas, sin ser puestos a órdenes de autoridad competente.
- Detenciones en condiciones inhumanas por períodos prolongados.
- Negación del derecho a ser asistido por abogado durante las etapas iniciales de la detención.

Testimonio

"Ella y yo somos primos y estábamos durmiendo con el resto de la familia el domingo como a las 5 de la mañana cuando comenzaron a tirar bombas, corrimos y nos escondimos en el servicio del restaurante Cross Way y la policía nos sacó a empujones y golpes. Nos echaron gas en los ojos y nos amarraron y tiraron dentro de la patrulla. Nos gritaban de que no miráramos ni levantáramos las cabezas, no querían que viéramos lo que estaban haciendo con otros detenidos y detenidas. Había un muchacho que se quejaba de los ojos y le volvieron a tirar gas en los ojos. En Las Lajas habían dos policías negros, uno González y otro Rodríguez. Nos tuvieron sin agua ni ir al baño muchas horas. De San Lorenzo nos

Llevaron a San Félix y de ahí a Las Lajas. De Las Lajas nos llevaron en helicóptero a David. En la tarde llegó la Defensoría del Pueblo y pidió que nos soltaran pues mi prima es menor de edad. Nos movían de un lugar a otro, pero la gente de la Defensoría nunca nos dejó solos. Nos compraron comida. Cuando la policía quiso llevarnos para la cárcel, la Defensoría lo impidió. Nos hicieron firmar un papel pero estaba asustado y no pregunté nada.” (Joven detenido en el cruce de Tolé)

8. CIRCULACIÓN (arts. 27 de la Constitución, 22 de la CADH y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)

-Arrestos de transeúntes y pasajeros del transporte público que no participaban en las protestas, según los relatos testimoniales recabados por esta Comisión.

Testimonio

“Es evidente la violencia racista que se dio. Bastaba con que te vieras como indígena o tuvieras rasgos parecidos para que te detuvieran. Muchas mujeres se quitaron las naguas y se vistieron con ropa latina.” (Ciudadano de San Félix)

“A los que venían en buses los bajaban y les robaban las cosas que traían y los golpeaban. Incluso vi como a una señora embarazada se bajo del bus con su familia. Traían varios niños y los agarraron y los golpearon y los metieron en una patrulla. Era una familia completa, de siete miembros. No sabemos sus nombres ni de dónde eran.” (Ciudadano de Boca del Monte)

9. PROPIEDAD PRIVADA (arts. 47, 48 y 30 de la Constitución y 21 de la CADH)

-Allanamiento y ocupación de bienes inmuebles sin autorización judicial, según los relatos testimoniales recabados por esta Comisión.

-Destrucción de la propiedad, según los relatos testimoniales recabados por esta Comisión.

-Confiscación de bienes muebles, tales como víveres de propietarios y efectos personales de los participantes en las protestas, transeúntes y pasajeros del transporte público, según los relatos testimoniales recabados por esta Comisión.

Testimonios

“Como a las 9 de la mañana escuché una bulla y me fui para el cuarto. En eso tiraron una bomba lacrimógena dentro de la casa. Tengo nietos pequeños en la casa. Salimos huyendo por el potrero atrás de mi casa. La guardia ocupó mi casa desde el domingo 5 hasta el miércoles 8 de febrero y me mandaron a decir que no podía regresar. Cuando por fin pudimos regresar, vi que se habían llevado unas mochilas, comieron mi comida, solo me dejaron una latitas y se obraron dentro de la casa. También me tumbaron la cerca, pues estaba lleno hasta el patio de esa gente”. (Ciudadana de Ojo de Agua, viuda de la tercera edad y que sufre de epilepsia)

“La policía ingresó por la fuerza al templo de las Asambleas de Dios que estaba cerrado y comenzaron a jugar con los instrumentos musicales. La Iglesia quedó abierta por 3 días. No permitían el paso a nadie” (Ciudadano de Ojo de Agua)

10. IGUALDAD ANTE LA LEY / NO DISCRIMINACIÓN (arts. 19 de la Constitución, 24 de la CADH y 3 del Protocolo de San Salvador)

-Todas las presuntas violaciones identificadas, siempre que se hayan producido en atención a la condición de indígenas Ngäbe o Buglé de los manifestantes.

Testimonios

“Agarraron a dos mujeres que venían en un bus vestidas con sus naguas, las bajaron y las esposaron en el suelo y las patearon en el cuerpo. Luego las metieron en el carro y se las llevaron.” (Ciudadano de Soloy)

“Nos gritaban: indio visto, indio muerto.” (Ciudadana de San Lorenzo)

11. DEBIDO PROCESO / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (arts. 32 de la Constitución y 8.1 y 25 de la CADH)

-Apertura de oficio por el Ministerio Público de un expediente penal por delito contra la libertad personal por la retención o “secuestro” de ciudadanos extranjeros, con base en “informes de inteligencia” de la Policía Nacional, uno de ellos sin firma responsable, y “declaraciones juradas” de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando lo que ocurrió en realidad fue que dichos ciudadanos extranjeros quedaron varados a raíz del cierre de la Carretera Interamericana.

-Presunta indagatoria de personas cuya identidad no fue previamente verificada, lo cual consta en el expediente penal abierto de oficio por el Ministerio Público.

-Inefectividad del hábeas corpus.

-Imposición de medida cautelar (firmar cada mes), a pesar que no se comprueba mínimamente la presunta vinculación de los detenidos liberados a los hechos que se les imputa, lo cual consta en el expediente penal abierto de oficio por el Ministerio Público.

-Liberación de un grupo de detenidos no indagados, sin que hubiese resolución que los cobijara, lo cual consta en el expediente penal abierto de oficio por el Ministerio Público.

Testimonio

“Los defensores de Oficio no estuvieron de acuerdo con las indagatorias pues todos los hábeas corpus tenían que ir a Panamá. El tratamiento de los detenidos no se realizó apegado al debido proceso. Instruyeron un solo expediente para casi todos los detenidos”. Miembro del Colegio Provincial de Abogados de Chiriquí.

12. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (arts. 56 de la Constitución, 19 de la CADH y 16 del Protocolo de San Salvador)

-Presuntos abusos, malos tratos y procesamiento de niños y adolescentes como adultos, denunciados a través de los medios de comunicación social e Internet.

-Presuntos actos de violencia sexual con abuso de poder y en atención a la condición de menor, denunciados a través de los medios de comunicación social e Internet.

-Muerte de un menor de edad con discapacidad (Mauricio Méndez), la cual aún no ha sido aclarada.

Testimonio:

“Me duele mucho lo que sucedió pues abusaron de jovencitos que quedarán afectados emocionalmente y que no sabemos cómo quedarán después. Es el caso de un joven de unos 17 años de una comunidad cercana que le dicen “Ch...”. Los guardias le tiraron gas pimienta y le vendaron los ojos y lo usaban de ‘escudo humano’ contra nuestras piedras. Dejamos de tirar piedras para no herirlo.” (Ciudadano de Nedrini)

13. PROTECCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (art. 18 del Protocolo de San Salvador, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y art. 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad)

-Presuntos abusos, malos tratos y procesamiento de personas con discapacidad sin tener en cuenta su condición especial, denunciados a través de los medios de comunicación social e Internet

-Presunta ejecución extrajudicial de un menor de edad con discapacidad (Mauricio Méndez).

Testimonio

“Era un niño de 16 años, bajo de mente. No hacía daño a nadie. Él cualquier cosa ayudaba a la gente. Quería mucho a mi mamá. Era una buena persona.

Era lunes en la noche y fuimos a ver lo que pasaba. Andábamos como 8 entre primos y amigos. Mauricio estaba con su amigo que se llama igual a él: Mauricio. Se pusieron en ese portal de la casa de la amiga de mamá, y cuando iba saliendo

del portal para buscarme, habían unos guardias escondidos junto a la casa blanca cerca de la casa del Sr. Nieto. Estaban por todos lados. Ellos vieron cuando mi hermano salió y le dispararon. No vimos quién fue pero sí escuchamos clarito que gritaron: '¡Feliz Año Nuevo!' y salió el disparo tirando chispas. Era como ver un fuego artificial, la misma cosa, explotó duro. Mauricio cayó herido y su amigo corrió a agarrarlo del suelo. Vinieron otros a ayudar a cargarlo unos por los brazos y otros por los pies. Lo llevaron a donde un señor con un carrito blanco para que lo llevar al hospital. Mauricio se metía la mano en el hueco de su garganta para sacar la sangre que no le dejaba respirar. Dicen que llegó vivo al hospital. Pido justicia para él." (Familiar de Mauricio, Las Lomas de David)

14. SALUD (arts. 109 de la Constitución, 10 del Protocolo de San Salvador, 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

-Presunta realización de arrestos en hospitales, denunciados a través de los medios de comunicación social e Internet.

-Presunta negación de una adecuada atención primaria de salud a los heridos, según los relatos testimoniales recabados por esta Comisión.

Testimonios

"No van al hospital o al centro de salud porque tienen miedo de que los cojan presos. Se están atendiendo en sus casas con medicina tradicional. A la mayoría de los heridos ningún doctor los ha visto." (Ciudadano de Boca del Monte)

"Huyendo me trepé arriba del techo del restaurante Yanesa y el policía se subió a buscarme. Yo me tiré y me doble un pie. Me llevaron al centro de salud, donde me atendió bien el doctor. Estando dentro del centro de salud, llegó la policía y tiró bombas lacrimógenas afuera del centro. Sse querían meter en el centro de salud y los doctores cerraron las puertas y no les dejaron entrar." (Niño de 14 años herido en el cruce de San Félix)

15. PUEBLOS INDÍGENAS (arts. 90, 108 y 127 de la Constitución y Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas)

-Todas las presuntas violaciones identificadas, siempre que se hayan producido en atención a la condición de indígenas Ngäbe o Buglé de los manifestantes.

Testimonio

“Me dispararon y caí. Cuando traté de levantarme, me dieron un manducazo por la espalda. Salí corriendo, me tiré por una cerca y me escondí detrás de una casa. Desde ahí vi cómo agarraron a un Bugodai y como entre ocho guardias lo pateaban. Lo obligaron a ponerse en cuatro y se le montaban encima haciendo que lo violaban y le decían: ‘¿Fuerza armada? Si ni siquiera pudiste defender a tu gente, aquí menos te podrás defender tú mismo. Ahora te vamos a violar.’ Seguían golpeándolo mientras el Bugo se callaba. Luego de un rato lo esposaron y lo tiraron en un carro.” (Ciudadano de Nedrini)

XIII. HALLAZGOS FUNDAMENTALES

- 1) Se han identificado al menos 15 tipos de violaciones a los DDHH, todas ellas presuntamente cometidas por agentes del Estado.
- 2) Existen indicios que gran parte de los manifestantes eran mujeres y menores de edad, ya que familias enteras bajaron de sus comunidades hasta los puntos de movilización.
- 3) No existen indicios que las personas convocadas por la Coordinadora y las autoridades tradicionales hayan utilizado armas letales. Solo usaban piedras para defenderse.
- 4) Existen indicios que el Estado, además de medios y procedimientos para el control de multitudes y disturbios civiles, utilizó tácticas militares y armas letales, o armas no letales en forma letal.

5) Se utilizaron buses del MEDUCA para privar de libertad, maltratar y trasladar a los centros de detención a las y los ciudadanos indígenas detenidos.

XIV. ACCIONES URGENTES RECOMENDADAS

1) Conformar un equipo técnico de mujeres capacitadas (CONAMUIP-CLADEM y Colegio Provincial de Abogados de Chiriquí, en articulación con las autoridades tradicionales, para atender de manera expedita a la menor de edad presuntamente violada y a las otras presuntas víctimas de violación, para que se realicen los exámenes de VIH, ITS y embarazo y atender otras lesiones físicas y psicológicas. La mencionada menor de edad fue revictimizada por una organización “solidaria”, la cual filmó un video a la víctima en medio de su crisis nerviosa y luego envió una noticia por Internet sobre el hecho con todos sus datos personales, colocando en indefensión a la menor.

2) Articular esfuerzos interinstitucionales para definir una estrategia legal en los niveles nacionales e internacionales con las siguientes acciones:

-Constituir una Comisión Penal para dar seguimiento a los expedientes y corroborar si la investigación del Ministerio Público cumple efectivamente con las normas y procedimientos establecidos en la ley.

-Constituir una Comisión Internacional para solicitar medidas urgentes a los órganos de control y corroborar si se cometieron delitos contra la humanidad.

-Constituir una Comisión sobre Uso de la Fuerza para profundizar en el examen técnico de las tácticas, logísticas e instrumentos policiales-militares utilizados en los hechos.

-Tomar este conjunto de casos como emblemático para llamar la atención sobre la crisis de institucionalidad democrática y de DDHH.

-Seguir articulando las informaciones con la recopilación de datos e informaciones de otros grupos que estuvieron en el área, a fin de aportar a la profundización de las investigaciones futuras.

XV. PROPUESTAS DE SEGUIMIENTO

Esta experiencia ha traído diversas enseñanzas, entre ellas la necesidad de fortalecer a las organizaciones de DDHH en Panamá, tanto de la sociedad civil como del sector público. En función de esto, proponemos algunas ideas de seguimiento que deben ser retroalimentadas por los diversos actores interesados:

- Realizar reuniones periódicas, presenciales o virtuales, con miras a impulsar la articulación de las organizaciones de DDHH y la división de tareas de seguimiento de las informaciones contenidas en este informe.
- Impulsar procesos de formación de recursos humanos en la metodología de investigación y elaboración de informes de DDHH en contextos de crisis y de criminalización de la protesta social.
- Impulsar la conformación de veedurías sociales y la capacitación en mediación y transformación pacífica de conflictos.
- Fortalecer el impulso de las **Medidas Cautelares** pedidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por instancias indígenas y derechos humanos a favor de las personas y comunidades Ngäbe o Buglé
- Crear una oficina permanente de la sociedad civil para recibir denuncias a violaciones de los DDHH en las comarcas indígenas.
- Apoyar los procesos de investigación, de acuerdo al numeral 8 de los Acuerdos de San Lorenzo.
- Garantizar los derechos y la protección a las víctimas en cualquier proceso de investigación subsiguiente.

XVI. REFLEXIONES FINALES

La forma como un gobierno trata a los más humildes y excluidos de una sociedad devela sus valores humanos, su forma de hacer vida en democracia y su visión del desarrollo nacional. Estamos profundamente consternados por el poco valor que se ha reconocido a la vida de la ciudadanía Ngäbe, Buglé y campesina. Nos preocupa cómo, en reiteradas ocasiones, se han presentado oportunidades para hacer, del diálogo transparente y respetuoso, el camino hacia la resolución pacífica de los conflictos sociales entre la ciudadanía y las autoridades. Sin embargo, no se logra el objetivo. El gobierno no cumple a cabalidad con los acuerdos y esto deteriora su credibilidad y la confianza en su voluntad política para realmente solucionar los problemas.

Aspiramos a que se protejan la democracia y los DDHH en Panamá y solicitamos a los organismos nacionales e internacionales de DDHH, a la Defensoría del Pueblo y a las instancias del Ministerio Público que pongan en acción todos los marcos legales y convenios ratificados por nuestro país para la protección y vigencia plena de los DDHH en Panamá. Seguiremos educando y trabajando con las entidades y organizaciones, las iglesias y la ciudadanía para que esta historia de desatinos no se vuelva a repetir, pues la sociedad panameña no aguanta más desconocimientos de la ley, ni visiones militaristas para abordar la resolución de los conflictos sociales. Recordamos a aquellos que solo piensan en los negocios sin responsabilidad social y ambiental, que no hay nada más frágil que la inversión extranjera ante un clima de inestabilidad social y de inseguridad institucional democrática.

Concluimos este informe con las palabras de una ciudadana Ngäbe:

“Hace casi dos semanas que estoy fuera de mi casa. Dejé a mis dos hijas, de 10 y de 6 añitos. Las dejé con una nuera. Estoy luchando por ellas. No deseo un futuro malo para ellas. La minería ni las hidroeléctricas no es buena para nosotros: matan la tierra y los ríos. Deseamos nuestra tierra limpia. Martinelli pidió el voto y ahora nos paga así. Deseamos que nos respeten y nos dejen en paz”. (Lucía, ciudadana de Vigüí)

ANEXO 1

Ciclo de Violencia y Abordaje Institucional de los Conflictos Sociales

